



Estados Unidos

Superficie : 9.629.090 km².

Población : 294.043.000.

Idioma : inglés.

Jefe del Estado : George W. Bush.

Estados Unidos - Informe anual 2005

Con el escándalo de Abu Ghraib, y la campaña de las elecciones presidenciales, la prensa norteamericana salió del torpor patriótico en que la sumergieron los atentados del 11 de septiembre. Ahora, la primera amenaza para la libertad de prensa viene de...¡la justicia ! Negándose a reconocer a los periodistas el derecho a proteger sus fuentes en los tribunales, algunos jueces federales han sancionado a varios de ellos.

Más que nunca, en 2004, la protección del secreto de las fuentes ha sido una piedra de choque entre la justicia y la prensa. Jim Taricani, del canal local de televisión WJAR-TV 10 (afiliado a NBC), fue así condenado a seis meses de residencia vigilada por "desacato al tribunal". Solo gracias a su delicada salud puso escapar a la prisión incondicional. La justicia federal norteamericana acusa al periodista de haberse negado a revelar a una sala especial la identidad de la persona que le facilitó un vídeo, realizado en el marco de una investigación secreta del FBI.

A fecha 31 de diciembre, Matthew Cooper, de la revista Time, y Judith Miller, del diario New York Times, seguían esperando saber si en la apelación confirmaban la orden de encarcelamiento, dictada contra ellos. Ambos periodistas se niegan a revelar sus fuentes a una sala especial, encargada de investigar sobre las fugas que llevaron a la publicación en la prensa de la identidad de Valerie Plame, una agente de la CIA. Por otra parte, en agosto condenaron a cinco periodistas a pagar una multa de 500 dólares diarios, durante todo el tiempo que se nieguen a revelar las fuentes que les permitieron citar el nombre de un científico acusado de espionaje y que, posteriormente, fue exonerado por la justicia. La Primera Enmienda de la Constitución, dedicada a la libertad de expresión, no protege explícitamente el secreto de las fuentes. Ese punto se deja al criterio de los jueces. Pero, lo que se cuestiona aquí es el periodismo de investigación. Sin el secreto de las fuentes garantizado, incluso ante los tribunales, nadie que disponga de informaciones sensibles se atreverá ya a facilitárselas a la prensa. Este principio está reconocido en 31 Estados del país y en Washington D.C., donde lo protegen unas "leyes escudo" ("shield laws"), pero no a nivel federal. La cuestión podría regularse definitivamente si se aprobara el proyecto de ley presentado el 9 de noviembre de 2004 por el senador demócrata de Connecticut, Christopher J. Dodd. Ese texto prevé prohibir a los tribunales federales, así como a los poderes legislativo y ejecutivo, obligar a un periodista a revelar sus fuentes.

El año 2004 estuvo también marcado por nuevos casos de expulsión de periodistas extranjeros, que no disponían de visados de prensa. Fue el caso de Elena Lappin, colaboradora del diario británico The Guardian, detenida el 3 de mayo a su llegada al aeropuerto de Los Angeles. Tras pasar una noche en la cárcel, al día siguiente la pusieron en un avión con destino a Londres. En 2003, expulsaron a 13 periodistas, en las mismas condiciones. Todos llegaron de países cuyos ciudadanos están exentos de visado. Una excepción que nunca ha incluido a los periodistas pero de la que disfrutaban en la práctica, hasta el 11 de septiembre de 2001. El reforzamiento de los controles en las fronteras, consecutivo a los atentados, puso fin a esa tolerancia, sin que se les informara de ello. Finalmente, las fuertes protestas de la profesión llevaron a los servicios de inmigración a decretar, el 21 de mayo de 2004, que un periodista que se presente en la frontera sin visado será aceptado, e informado de la reglamentación. En caso de reincidencia, se le expulsará.

Un pesado balance fuera de las fronteras

Aunque Estados Unidos, como señala la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, publicada a finales de octubre, conserva un buen lugar en la situación de la libertad de prensa en el interior de sus fronteras, se encuentra relegado al puesto 108 (entre los 167 países clasificados) por los atentados a esta libertad fundamental, que se le imputan en Irak. El ejército norteamericano está implicado en la muerte de cinco periodistas y colaboradores de los medios de comunicación, a los que mataron en 2004. Un balance idéntico al de 2003. Y, en todos los casos, la administración se niega a poner en marcha investigaciones serias sobre ellos (ver el capítulo de Irak). Por otra parte, en la base de Guantánamo, donde están detenidos presuntos miembros y aliados de Al-Qaeda, el trabajo de los periodistas continúa estrictamente encuadrado desde que en 2002 se difundieron, en todo el mundo, unas fotos de presos sufriendo tratos degradantes.

¿La prensa norteamericana en crisis ?

Para algunos medios de comunicación, la campaña presidencial fue una ocasión para volver sobre los errores cometidos durante el primer mandato de Georges W. Bush, y especialmente no cuestionar la existencia, proclamada por la Casa Blanca, de armas de destrucción masiva (ADM) en Irak. Ese episodio disminuyó seriamente la imagen de la prensa norteamericana en el extranjero donde, desde el asunto del Watergate, estaba considerada como un ejemplo de neutralidad y eficaz contra-poder. Tan solo unas pocas personalidades de la televisión y tres cabeceras de la prensa escrita, los diarios Washington Post y The New York Times, y el semanario The New Republic, entonaron un mea culpa a ese respecto. El escándalo del trato dado a los detenidos iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib en Bagdad, revelado en abril, fue una ocasión para que la prensa norteamericana saliera del torpor patriótico en que le sumergieron los atentados del 11 de septiembre. Desde aquella fecha, criticar la actuación de la administración Bush en Irak era un acto antipatriótico en un país unido, tras su presidente, en la lucha contra el terrorismo. El hecho de que 128 cabeceras de la prensa escrita llamaran a votar por John F. Kerry, frente a las 105 a favor de Georges W. Bush, según la revista Editor & Publisher, confirma que esa unidad no significa ya una obligación moral para la prensa.

Balance de 2004

- ▶ 9 periodistas detenidos
- ▶ 8 casos cuestionando el secreto de las fuentes

Testimonio

Cogido en la trampa de un juez federal

En el país de la Primera Enmienda, una decena de periodistas están perseguidos judicialmente porque se niegan a revelar sus fuentes a los tribunales federales norteamericanos. A varios de ellos podrían condenarles a la cárcel. Una amenaza creciente sobre el derecho de los norteamericanos a estar informados, ilustrada por el relato de Matthew Cooper, de Time Magazine, implicado en el "caso Plame".

Dejando aparte dos o tres contravenciones por exceso de velocidad, jamás había tenido nada que ver con la justicia. Trabajé duro en la escuela, fui a la universidad y después de soñar con dedicarme a la política, decidí lanzarme al periodismo. Pensaba que era un oficio interesante, divertido y que trabajaba por el bien de la sociedad. Tuve éxito, escribí para publicaciones como Newsweek, The New Republic, y ahora para Time magazine, donde cubro la Casa Blanca. Podéis imaginar por tanto mi sorpresa cuando me encontré cogido en la trampa de un juez federal, y enfrentado a la eventualidad de un encarcelamiento de 28 meses.

Los problemas empezaron en 2003, cuando el cronista norteamericano Robert Novak reveló la identidad de una agente de la CIA en activo, Valerie Plame. La revelación de la identidad de un agente de la CIA puede ser un crimen federal, y se escucharon protestas en contra de quien reveló a Novak el nombre de la señora Plame. Su marido, el ex embajador Joseph Wilson, tan solo unas pocas semanas antes de que se publicara el artículo de Novak, había criticado públicamente las declaraciones de la administración Bush sobre las intenciones de Irak de desarrollar armas nucleares, y fueron muchos los que vieron, en la revelación de la identidad de la señora Plame, una sanción contra él. En aquel período, yo entregué un artículo corto para el sitio de Internet de Time magazine, señalando que parecía haber una "guerra contra Wilson", y añadiendo que también algunos "agentes del gobierno" habían indicado a Time que la mujer de Wilson trabajaba para la CIA. El clamor de indignación que provocó la revelación de la identidad de la señora Plame tuvo como consecuencia el nombramiento de un fiscal especial, encargado de encontrar el origen de la fuga. En mayo de 2004 estaba citado a comparecer por el fiscal especial, para averiguar lo que sabía a propósito de las fugas. Me negué a cooperar y a responder a la citación -con el formidable apoyo de mi empresario- hasta agosto de 2004, cuando la fuente en que el procurador parecía estar interesado aceptó, sin ambigüedades, que yo prestara testimonio. Por tanto, hice una declaración y pensaba que mis problemas jurídicos tocaban a su fin. Sin embargo, poco tiempo después, el fiscal especial me citó de nuevo, pidiéndome que revelara otras fuentes confidenciales. Esa vez parecía que no podía llegarse a ningún compromiso. Me encontré pues de nuevo ante el tribunal donde, en el momento en que escribo esto, en enero de 2005, el caso sigue abierto. El proceso ha sido agotador y costoso. Pasé las Navidades preguntándome si el tribunal iba a decidir, y si tendría que ir a la cárcel. No le he hablado de mis desventuras a mi hijo de seis años, y tampoco se muy bien qué explicaciones le daré si vienen a detenerme.

Si se me obliga a prestar testimonio, tengo previsto negarme y cumplir lo que podría ser una pena de cárcel, o un arresto domiciliario. No me alegra la perspectiva de estar encarcelado y no me considero un mártir, ni tampoco alguien particularmente valiente. Pero creo sinceramente que los periodistas tendrían que disponer de una protección razonable de sus fuentes confidenciales. De hecho, la mayoría de los 50 Estados norteamericanos conceden protección jurídica a los reporteros, lo mismo que hacen muchos países. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, en la que Estados Unidos es un miembro importante, es famosa por su apoyo al derecho de los periodistas a proteger sus fuentes. Pero, como mi caso se está tratando en un tribunal federal, tengo que luchar para conseguir protección jurídica.

Felizmente, en el transcurso de este procedimiento he tenido la suerte de verme fuertemente apoyado por Time magazine y las empresas del grupo Time, Inc. y Time-Warner. El redactor jefe de la revista, Jim Kelly, me defendió ante el tribunal ; los abogados de la sociedad me han representado, de la mejor manera posible. También me han respaldado amigos y colegas, incluido Reporteros sin Fronteras que, sin que yo se lo pidiera, ha apoyado mi caso. Fue un alivio la presencia, durante la audiencia, de su representante en Washington, Lucie Morillon. Generalmente, Reporteros sin Fronteras está presente en lugares como Cuba y Siria, para ayudar a los periodistas. Estoy seguro de que para la organización resulta sorprendente, como lo es para mí, ver que también en Estados Unidos los periodistas corren el riesgo a ir a la cárcel, simplemente por hacer su trabajo.

Washington, enero de 2005